

Sergio E. Visacovsky

Centro de Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Experiencias de descenso social, percepción de fronteras sociales e identidad de clase media en la Argentina post-crisis

Resumen:

En este artículo mi intención es mostrar cómo quienes han sido categorizados sociológicamente como “clase media” en la Argentina en los tiempos posteriores a la crisis del 2001-2003, han percibido los límites que demarcan su posición en el espacio social respecto a otros, y cómo se las han arreglado para defender, reformular o renovar tales límites en los que, entendían, debían estar necesariamente incluidos. Basándome en un trabajo de campo etnográfico multisituado llevado a cabo entre el año 2004 y el 2006 con diferentes individuos y organizaciones, me detendré especialmente en las diferentes respuestas ofrecidas por miembros identificados por sí mismos o por otros como “clase media”, ante las dificultades surgidas en las apuntadas circunstancias críticas, para mantener o alcanzar una determinada cobertura de salud o una educación, consideradas *apropiadas*.

Palabras clave:

descenso social, fronteras sociales, clase media, Argentina, crisis económica

Abstract:

In this article I want to show how people categorized as middle class by sociologists have perceived social boundaries in Argentinean post-crisis (2001-2003). In this context, middle class is the

consequence of how people define social boundaries by means of everyday practices. People defend, reshape or renew social limits via cultural resources. Through these practices, some people are separated from other: they try to define in what category of classification they are included and, at the same time, who will be excluded from such category forever. Based on ethnographic multi-sited fieldwork carried out in 2004-2006 among different individuals and organizations, I am interested in how people preserved or achieve their medical insurance services and public and private schools considered suitable in a critical social situation.

Key words:

downward mobility, social boundaries, middle class, Argentina, economic crisis

Sergio E. Visacovsky

Centro de Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Experiencias de descenso social, percepción de fronteras sociales e identidad de clase media en la Argentina post-crisis*

Tradicionalmente, Argentina ha sido representada como un país de clase media que ofrecía amplias oportunidades de ascenso social a sus habitantes. El éxito estaba asegurado para todos aquellos que se esforzaban en conseguirlo, que amasen el trabajo y tuviesen voluntad de progreso. Usualmente, estos valores han estado asociados a los inmigrantes europeos que arribaron al país entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX; por ende, ha sido un lugar común sostener que la masa de descendientes de dicha inmigración fue la base de una inmensa clase media, la más numerosa de América Latina. Gino Germani (1961), considerado el padre de la sociología académica en el país, afirmaba que en el período 1870-1950 se había triplicado la proporción de los “estratos medios” en la Argentina¹. Considerada sólo la ciudad de Buenos Aires, en 1936 la clase media constituía el 45,9% de la población económica-

mente activa (Germani, 1942), cifra que ascendió en la década de 1980 al 70% (Minujin y Kessler, 1995: 21). Algunos trabajos sostienen que en 1974 el 82,6% de la población argentina era de clase media, y sólo el 7,1% era pobre (Sosa-Escudero y Petralia, 2010).

Sin embargo, durante la década de 1990 y los inicios del nuevo siglo este retrato fue crudamente desmentido por otro, donde las posibilidades efectivas de ascenso social se restringieron considerablemente, y la pobreza se expandió ampliamente, debido al incremento de la desocupación y la subocupación, la reducción de ingresos y el trabajo precario, inestable y sin cobertura social. Muchos estudios estimaban que la clase media, otrora numerosa, se había reducido considerablemente, y hasta no faltaban quienes auguraban su posible extinción. Este proceso databa en realidad de 1974, y prosiguió en los años

siguientes; así, en 1988 (un tiempo caracterizado por crisis económica e hiperinflación) la clase media había quedado reducida al 45% de la población del país, frente a un 44,6% de pobres. Una recuperación posterior mostraba para 1994 un 63,8 % de clase media frente a un 26,1% de pobreza, pero en 2002 sólo un 26% era considerado de clase media, mientras que los pobres los duplicaban. Tras la recuperación económica iniciada en 2003, las mediciones estimaron para el año 2006 que la clase media alcanzaba al 58% de la población, mientras que los sectores de bajos ingresos era el 32% (Sosa-Escudero y Petralia, 2010). En consecuencia, los expertos han coincidido en que durante la década de 1990 se produjo un profundo cambio económico-social en Argentina, merced al cual el país empezó a parecerse más a las restantes naciones de América Latina. Por esta razón, muchos entendían que era hora de despedirse para siempre de aquel “país de la clase media”².

Un momento crucial de este proceso fue la llamada “crisis” económica y política, habitualmente localizada a fines de 2001. Una de las líneas de interpretación que recibió más adhesión fue la que sostuvo que la crisis fue un corolario inevitable de las políticas neoliberales para la región, implementadas en el curso de la década de 1990 (Auyero, 2000; Goddard, 2006; Grimson, 2004; Guano, 2002 y 2003; Pérez, 2002; Svampa, 2005; Teubal, 2004). Considerado como el mayor desastre socio-económico

que le haya tocado vivir a la Argentina en el siglo XX, la crisis se caracterizó por altísimos niveles de desempleo y pobreza, una intensa protesta social seguida de una violenta represión estatal, y un inédito descrédito de los representantes políticos frente a la población. En este contexto, innumerables escritos de diversa índole han presentado a la clase media como una de las protagonistas principales de esta coyuntura. En estos trabajos, la clase media aparecía afectada como nunca antes por el desempleo y la pérdida de su poder adquisitivo, situación agravada ante las severas medidas económicas y financieras establecidas entre diciembre de 2001 y enero de 2002, que promovieron los famosos “cacerolazos”, nombre con el cual se designaron las manifestaciones de vecinos de grandes urbes –como Buenos Aires–, que protestaban golpeando cacerolas.

El empobrecimiento de la sociedad argentina durante la década de 1990 coincidió con un renovado interés sociológico por la clase media, el cual se prolongó durante y después de la crisis del 2001. Como parte de una corriente general orientada a estudiar los cambios profundos de la estructura social, las investigaciones centradas en la clase media abordaron su proceso de reducción, en virtud tanto de la emergencia de vastos sectores que fueron definidos como “nuevos pobres”, así como del ascenso social de una fracción más pequeña. Varios de estos estudios indagaron en el modo en que las transformaciones de las condiciones de vida dieron

lugar a diferentes tipos de respuestas, a nuevas identidades y estilos de vida, o a situaciones en que las viejas identidades convivían conflictivamente con las nuevas (González Bombal, 2002; Kessler, 1999; Kessler y Espinoza, 2003; Kessler y Di Virgilio, 2008; López y Romeo, 2005; Lvovich, 2000; Minujin, 1995; Minujin y López, 1994; Minujin y Kessler, 1995; Minujin y Anguita, 2004). La importancia de muchos de estos trabajos sociológicos radicó en que no sólo se interesaron en relevar evidencias objetivas del descenso social, sino que también registraron las experiencias concretas de quienes lo sufrían, las prácticas mediante las cuales intentaban amoldarse a la emergencia, sus formas de organización y protesta, e incluso los modos en que delineaban su identidad social.

Así, los cambios suscitados en la composición de la clase media (tal como ha sido definida e identificada por los investigadores) dieron lugar a un interés por saber en qué medida los mismos eran percibidos por los protagonistas, y cómo habían afectado o no a una identificación en tanto “clase media”. Los estudios mostraban diversas variantes. Mientras algunos de quienes habían descendido socialmente seguían afirmando pertenecer a la clase media en razón de su educación o refinamiento, otros aseveraban directamente ser “pobres”, debido a que, o bien carecían de trabajo o poseían un empleo precario con ingresos irregulares, o porque sus bajos ingresos no les permitían satisfacer requerimientos básicos, o participar

de ciertos consumos. En tanto que algunas investigaciones sostenían la existencia de una erosión de la identidad de clase media (Kessler y Di Virgilio, 2008: 42-44), otras planteaban que la identidad de clase media no había sido afectada y que, por el contrario, la mayor parte de la población, pobres y ricos, seguía viéndose a sí misma como de clase media³.

La relación entre la tipificación sociológica de una clase media “objetiva”, y una clase media percibida como tal por parte de los individuos concretos (“clase media subjetiva”), plantea un problema muy especial a los investigadores. Considerada sólo desde el punto de vista de las mediciones cuantitativas, la población de la clase media se había reducido; no obstante, el paso previo consistía en acordar los criterios mediante los cuales la clase media era delimitada. Esto supone una definición *a priori* de la clase media, lo cual parece obvio e imprescindible si se afirma la existencia de una entidad llamada “clase media”⁴. Pero, como es de esperar, no siempre los expertos han compartido estos criterios, lo cual conduce inevitablemente a discusiones respecto a cómo estimar los límites entre la clase media y las otras clases y, aún más, entre distintos estratos de la clase media⁵. El problema es aún más complejo a la hora de explicar por qué en algunos casos las personas pueden percibir su pertenencia a una clase en consonancia con lo que dictamina el análisis de los expertos, y por qué en otros su representación es completamente discordante⁶. ¿Por qué descartar las

autopercepciones cuando se tratan de establecer las pertenencias de clase? ¿Cómo explicar las discontinuidades o conflictos entre lo objetivo y lo subjetivo, entre las viejas identidades y creencias asumidas, y las nuevas condiciones reales de vida? Si las experiencias de descenso social o las identidades sociales son vistas como ilustraciones de los procesos objetivos de empobrecimiento, a los que debían expresar necesariamente, la relación compleja y a menudo conflictiva entre las condiciones objetivas y las experiencias y percepciones de pertenencia sólo pueden ser vistas como desajustes o desacoples, los cuales deberían reencontrar su armonía en un futuro.

Una perspectiva diferente resulta si los investigadores se percatan de que sus esfuerzos por establecer las fronteras apropiadas de la clase media a la hora de las mediciones o las encuestas sociológicas en el terreno, también son perseguidos por las personas que son objeto de su atención. Por esta vía, el foco de la investigación se reorienta al estudio de los modos variados en que las personas establecen delimitaciones (al igual que los expertos, corrigiendo otras delimitaciones a las que juzgan erróneas), bajo ciertas condiciones restrictivas. Estos dispositivos de delimitación constituyen aspectos centrales de los procesos de formación y reproducción de la diferenciación y la desigualdad social⁷. La constitución de fronteras sociales incluyen tanto aquello que usualmente es llamado "objetivo" (que produce formas de exclusión y segregación), como lo simbólico o

significativo, esto es, la categorización de objetos, personas, tiempos y espacios (Lamont y Molnár, 2002: 168-169). Un programa de investigación centrado en la constitución de fronteras sociales debe abordar sus propiedades desde un punto de vista empírico, de modo tal que puedan tomarse manifiestas sus características específicas, tales como su visibilidad, durabilidad o permeabilidad⁸.

Dado el lugar crucial que ha tenido la idea de clase media para una gran parte de la población argentina en el curso del siglo XX (Adamovsky, 2009), el empobrecimiento masivo y las experiencias de descenso social no sólo permiten estudiar los modos posibles en que fueron afectadas las condiciones y estilos de vida, e identidades de clase media; también, hacen posible conocer cómo quienes usualmente son caracterizados o se identifican como clase media han percibido su situación en el espacio social. Si bajo circunstancias críticas las fronteras sociales se tornan débiles o permeables, el esfuerzo por repararlas o conservarlas también puede hacerlas colectivamente visibles. La identificación de una posición social exige el trazado de fronteras: los actores pueden percibir que las mismas están a punto de perderse, han sido perdidas, o se han robustecido. En cualquier circunstancia, intentarán establecer qué es lo que los separa de otros en base no sólo a sus condiciones materiales de vida, sino también a los presupuestos cognitivos y simbólicos disponibles. La identificación,

reparación o fortalecimiento de fronteras sociales constituye una actividad cuyos resultados, sin embargo, no auguran necesariamente el éxito: la práctica de construcción de fronteras sociales es guiada por el anhelo de comunicar una posición que, no obstante, deberá continuamente ser aprobada públicamente, aprobación que dependerá de los públicos específicos en los que la misma sea exhibida.

En este artículo mi intención es mostrar cómo quienes han sido categorizados sociológicamente como “clase media” (no importa si “en descenso”, “nuevos pobres”), han percibido los límites que demarcan su posición en el espacio social respecto a otros, y cómo se las han arreglado para defender tales límites en los que, entendían, debían estar necesariamente incluidos. Examinaré inicialmente las interpretaciones sociológicas acerca de los procesos de movilidad social descendente y las transformaciones identitarias de la clase media durante la década de 1990, y las lecturas sobre las reacciones públicas y las formas de organización social calificadas como “de clase media” durante los tiempos de la llamada “crisis del 2001”. Luego, basándome en un trabajo de campo etnográfico multisituado llevado a cabo entre los años 2004 y 2006 con diferentes individuos y organizaciones que se caracterizaban a sí mismos o eran categorizados como “de clase media” (todos afectados por las consecuencias económicas de la llamada crisis argentina)⁹, me detendré especialmente en las diferentes respuestas ofrecidas por miembros

identificados por sí mismo o por otros como “clase media”, ante las dificultades surgidas en las apuntadas circunstancias críticas, para mantener o alcanzar una determinada cobertura de salud o una educación, consideradas *apropiadas*. Como veremos, aunque la gama de respuestas puede ser variada, es posible reconocer una lógica de diferenciación a la que subyace un mismo tipo de valoración respecto a lo *correcto* o *justo*.

I. Los procesos de descenso social y las transformaciones de la identidad de la clase media en la década de 1990: los estudios sociológicos

Si bien durante su historia económica en el siglo XX Argentina alternó períodos de crecimiento económico y prosperidad con otros de declinación, fue en el curso de los años 1990 cuando, quizá, la idea de una Argentina abierta a las oportunidades de ascenso social fue fuertemente desafiada. La desindustrialización iniciada a mediados de la década de 1970 y agudizada en el curso de la última dictadura militar (1976-1983), los frecuentes procesos inflacionarios durante el curso de los años 1980, los programas de ajuste fiscal –entre otros factores– condujeron a un escenario de severo empobrecimiento en la década de 1990, que incidió directamente en las condiciones de vida

de los sectores usualmente caracterizados como “clase media”. En dicho período se inició una etapa de profundo desempleo, siendo emblemática la tasa del Gran Buenos Aires, el distrito con más población, donde había subido del 6% al 17,9% entre 1991 y el 2000 (Kessler y Di Virgilio, 2008). El momento más agudo de esta situación se ubicó entre fines del 2001 y el año 2002, cuando sobrevino la ya mencionada “crisis argentina”. Para el año 2002 un 21,5% de la población activa se encontraba desocupada, (un récord histórico de 3.038.000 personas sin un puesto de trabajo, según datos del INDEC). A estos datos debía agregarse una subocupación del 12,7% (1.794.000 personas que trabajaban menos de 35 horas semanales). Y un 25,7% de los ocupados de todo el país ganaba menos de 200 pesos mensuales (un poco más de 50 dólares, aproximadamente). Como consecuencia del desempleo, pero también de la reducción en los ingresos debido a la devaluación de la moneda, hacia mediados de 2002 las estadísticas oficiales consideraban que un 53% de la población argentina vivía por debajo de la línea de pobreza (unas 19 millones de personas), y casi la cuarta parte lo hacía en condiciones de indigencia (EPH, 2002, mayo).

Esta situación general impactó en los segmentos llamados “de clase media”. Durante la década de 1990 la brecha entre ricos y pobres en el país se había incrementado un 57%, y en el conurbano¹⁰ bonaerense el 48,2% de sus habitantes podían ser considerados “nuevos

pobres”, es decir, “clase media en descenso” (EPH, 1999)¹¹. Según un conjunto de estudios sociológicos, este estrato de pobreza reciente o “nueva” se diferenciaba del formado por los sectores pobres “tradicionales” o “estructurales”, en la medida que estos últimos nunca habían conocido en el pasado algo diferente de la pobreza. Sostenían que los “nuevos pobres” se subdividían, a su vez, en: a) aquellos que en el pasado no habían sido pobres, pero habían llegado a serlo en la actualidad como consecuencia de la imposibilidad de acceder a ciertos servicios básicos como la salud y la educación (debido a su privatización y al consiguiente encarecimiento de sus tarifas); b) aquellos que habían caído en la pobreza, pero que aún no habían perdido el acceso a bienes y servicios básicos (Minujin y Kessler, 1995).

Este empobrecimiento de los segmentos tipificados como “clase media” fue uno de los focos principales de interés para los investigadores sociales argentinos desde mediados de los años noventa, en particular porque estaban convencidos que constituía una de las vías principales a través de las cuales era posible poner en evidencia las consecuencias de la implantación de los programas económicos definidos como neoliberales¹². Al ya mencionado incremento de la desocupación y la subocupación, añadían como causales la reducción de los ingresos, el trabajo precario, inestable y sin cobertura social. Buena parte de estos estudios pronosticaron una drástica reducción en el

tamaño de la población de clase media en Argentina (comparándola con los niveles históricos), e incluso muchos auguraron su casi desaparición, en la medida que se habían esfu­ mado las condiciones que habían hecho posible hasta entonces la movilidad social ascendente (González Bombal, 2002; Lvovich, 2000; Minujin y Kessler, 1995; Minujin y Anguita, 2004).

Sin duda, estos trabajos constituyeron un significativo aporte, pues enfatizaron en las consecuencias de las políticas económicas implementadas para la región durante la década de 1990, sobre todo en el crecimiento de la pobreza y la exclusión social como contrapartidas de la concentración de la riqueza¹³. Si bien gran parte de la fuerza de estos estudios radicó en el uso de la información estadística disponible, la mayor parte de ellos también llevó a cabo investigación cualitativa, indagando en las estrategias de supervivencia familiar, las transformaciones de las condiciones y estilos de vida, y las experiencias resultantes del impacto del descenso social. La información era generada principalmente a través de entrevistas a una población “de clase media” predefinida por los investigadores, conformada por desocupados, individuos en condición laboral “precarizada”, o jubilados, todos con muy bajos ingresos. También podía incluir a personas que en el pasado habían desempeñado cargos jerárquicos en empresas, así como empleados administrativos del sector público y privado, comerciantes, maestros y profesionales de

diversa índole (González Bombal y Svampa, 2001; Lvovich, 2000).

Al relevar las experiencias de caída o descenso social de los llamados “nuevos pobres”, estos estudios realizaron un importante aporte al encarnar los datos estadísticos en historias de vida concretas. Desde su punto de vista, los “nuevos pobres” ponían en evidencia la transformación y aún extinción de la clase media, lo cual debía afectar negativamente a las mismas identidades de clase, “erosionándolas” (Kessler y Di Virgilio, 2008: 31, 42). Muchos de los relatos personales de los entrevistados mostraban que “ser de clase media” remitía a una época pasada perdida, a una edad de oro donde estaba asegurado el bienestar material, estaba intacta la dignidad personal, y el futuro se percibía con cierta tranquilidad. En ese pasado, el ascenso social era posible y existían garantías de que el esfuerzo en el trabajo encontrase compensación. En aquel tiempo pasado, las personas se veían a sí mismas como poseedoras de una serie de derechos, atributos educativos, culturales y méritos individuales, que las diferenciaban tanto de las clases dominantes como de los sectores más pobres (Lvovich, 2000: 51-54). Aún más; si muchos de quienes brindaban sus testimonios consideraban que no pertenecían más a la clase media, otros entendían que ésta, directamente, ya no existía más. Los autores concluían que la sociedad argentina había pasado de un modelo tripartito a otro dual, donde sólo existían los ricos y los pobres (González Bombal y Svampa,

2001:39). No obstante, otros estimaban que pese a la pérdida de los niveles de vida, la pertenencia a la clase media se sustentaba en la posesión de conocimientos y valores asociados con la importancia atribuida a la educación y a la “cultura”, entendida ésta como consumo de libros, cine, museos, etc. Gran parte de estos estudios concluían que amplios sectores de la sociedad argentina se identificaban como pertenecientes a una “clase media empobrecida” o a una “nueva pobreza”, la cual constituía, pues, tanto una condición objetiva como una percepción de la propia situación, que indefectiblemente alteraba la identidad de clase. Gabriel Kessler y María Mercedes Di Virgilio señalan que la mayor parte de sus entrevistados a mediados de la década de 1990 no se consideraban como “pobres”, de quienes estaban separados –afirmaban– tanto por el estilo de vida pasado como por el presente. Muchos entrevistados sostenían que, a pesar de todo, seguían siendo “clase media”, al enfatizar aspectos tales como el haber conocido un modo de vida mejor, el poseer educación, diplomas, la posición laboral o las costumbres. Algunos admitían que el empobrecimiento los ubicaba más cerca de la “clase baja”, aunque por encima de esta última, razón por la cual no solicitaban ningún tipo de asistencia por parte del Estado, reservada para los “verdaderos pobres”. Sin embargo, no faltaban aquellos que se consideraban expulsados de la clase media, especialmente quienes carecían de diplomas o no se desempeñaban en puestos calificados (Kessler y

Di Virgilio, 2008: 43). Pero en el contexto de la crisis, durante 2002, algunos trabajos pusieron en evidencia transformaciones significativas: ahora, muchos no sólo percibían haber sido expulsados de la clase media, y aceptaban identificarse como “nuevos pobres” (González Bombal, 2002), sino que también comenzaban a aceptar las políticas asistenciales que antes rechazaban (Kessler y Di Virgilio, 2008: 43-44).

Un aporte importante de estos trabajos es que muestran que las identidades de clase mantienen cierta autonomía respecto a las condiciones objetivas de vida. Con todo, la discontinuidad manifiesta entre la realidad estructural y las identidades sociales parece basarse en el principio de la inercia o la fuerza de la costumbre. El paso del tiempo, el deterioro de las condiciones de vida y la experiencia de la imposibilidad de retornar a niveles de vida pasados forzaría al restablecimiento de una continuidad entre condiciones de vida y percepción de clase: quienes empobrecen objetivamente, deberían tarde o temprano representarse el mundo y ellos mismos como pobres. Pero entonces, ¿cuál es la actitud científica a adoptar frente a las prácticas concretas que llevan a cabo los actores cuando intentan conseguir diferenciarse de aquellos con los que –creen firmemente– deben estar separados? Poco interesa, en este caso, si se adscriben como “clase media”, “pobres” o “nuevos pobres”: es la tarea silenciosa y cotidiana de diferenciación la que merece atención.

II. Clase media, crisis y los escenarios del trabajo de campo

Como ya he señalado, la crisis cuyo epicentro fue el año 2001 constituyó un escenario particular que coadyuvó a la transformación de las condiciones y estilos de vida, experiencias e identidades de aquellos sectores considerados como parte de la clase media. En tanto resultado de los procesos económicos de la década de 1990, la crisis profundizó aún más la desocupación y miseria generalizadas. La situación se agudizó debido a la falta de liquidez bancaria, a la cesación de pagos del Estado, la desvalorización de la moneda y, especialmente, a las restricciones al acceso del dinero depositado en los bancos impuestas por la administración de la Alianza el 3 de diciembre del 2001 –con el pretexto de impedir la fuga del capital financiero–, que recibieron el nombre informal de “corralito”¹⁴.

Durante este tiempo, se le atribuyó a la clase media un inusual protagonismo, dada su participación en formas de deliberación pública de efímera duración, como las asambleas barriales (Briones, Fava y Rosan, 2004; Diners-tein, 2003; Gómez, 2006; Rodgers, 2005; Rossi, 2005 a y b), en lugares de intercambio mediante monedas *ad hoc*, como los “clubes de trueque” (González Bombal y Svampa, 2001; González Bombal, 2002; Hintze, 2003) y muy especialmente en las famosas protestas urbanas conocidas como “cacerolazos”. Promovidas por el reclamo del levantamiento de las restric-

ciones impuestas a los depósitos bancarios, estas manifestaciones pronto se transformaron en una masiva impugnación, primero, del gobierno nacional y, poco después, del sistema político en su conjunto. Su estilo de protesta fue asumido en los años posteriores por las organizaciones de damnificados por las medidas financieras, las cuales continuaron durante los años siguientes con diferentes formas de protesta pública, así como con negociaciones con el gobierno, la justicia y los bancos, además de brindando asesoramiento legal y financiero a sus miembros, que asumieron la identidad de “ahorristas” (Gómez, 2009; Visacovsky, 2009 y 2010; Zenobi, 2006). Los “cacerolazos” fueron presentados por la prensa, así como por los muchos ensayos intelectuales y estudios académicos, como “reacciones espontáneas de la clase media” en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país. Los medios exhibieron una caracterización de la clase media afirmando ciertas peculiaridades inherentes, como la espontaneidad, el pacifismo, la autonomía, y su tendencia a agruparse a partir de relaciones de vecindad. Además de ser una de las imágenes con las que habitualmente ha sido representada la crisis, los “cacerolazos” fueron mayoritariamente vistos como una expresión del hartazgo de la clase media frente a las políticas gubernamentales, en particular como una consecuencia del deterioro efectivo o potencial de sus condiciones de vida. A la vez, su inédita actitud de salir a las calles, reunirse y protestar

planteó a la opinión pública el desafío de saber si la sociedad argentina estaba asistiendo a un cambio profundo y decisivo de su clase media, a un fin de su individualismo y materialismo en procura de una posible alianza con los desocupados, con los excluidos, con los trabajadores; o si se trataba de una falsa alarma, de un estallido fugaz (Visacovsky, 2009: 254-262).

En el curso de mi trabajo de campo desarrollado entre 2004 y 2007, interactué con muchas personas que habían participado de los “cacerolazos”. Sin embargo, mis interlocutores principales fueron personas que participaban de las organizaciones de “ahorristas”: conversé con ellos, así como observé y participé de sus actos públicos, protestas, marchas y reuniones. A diferencia de los casos presentados por los estudiosos de la “nueva pobreza”, aquí la experiencia del descenso social no procedía sólo del empobrecimiento resultante de la desocupación, la subocupación o los magros ingresos. En buena medida, era una consecuencia de la ya mencionada conversión en pesos del dinero depositado en dólares y otras monedas extranjeras en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, y de las restricciones imperantes para la libre disposición del mismo desde los primeros meses de 2002. Además de plazos fijos en dólares, mis interlocutores habían invertido en fondos comunes de inversión¹⁵ y en diferentes títulos públicos¹⁶, a los que algunos definían como una “opción conservadora” y, por lo tanto, “más aconsejable” por ser menos “riesgosa”¹⁷.

Como es de suponer, las medidas económicas de 2001-2002 no encontraron a todos los individuos y familias que habían llevado a cabo inversiones financieras en la misma situación. Por ejemplo, algunos de mis interlocutores también percibían un descenso de su nivel de vida, viéndose obligados a realizar recortes en sus gastos. Tampoco eran todos participantes de organizaciones de “ahorristas”, o de “tenedores de bonos”. Muchos habían presentado recursos de amparo e iniciado acciones judiciales, y otros se habían acogido a las nuevas normativas, aceptando cobrar su dinero en los términos establecidos por el Estado a partir de enero de 2002. Quienes parecían no haber sufrido especialmente un recorte significativo en sus niveles de vida no tenían inconvenientes en recibirme en sus hogares u oficinas de Recoleta, Palermo, Belgrano, Olivos o San Isidro, o encontrarse en algún café de dichas zonas¹⁸; siempre bien vestidos y sin signos visibles de estar padeciendo privaciones.

Pero buena parte de mis interlocutores en el trabajo de campo vivían con exiguos ingresos salariales o de jubilación. Los negocios o empresas de muchos habían quebrado, se encontraban sin trabajo, con sólo la ayuda de algún familiar, y a veces ni eso. En muchos aspectos, estas personas estaban viviendo situaciones semejantes a aquellas expuestas en las investigaciones sociológicas sobre la “nueva pobreza”. Entre los participantes de las asociaciones de “ahorristas”, era posible identificarlos

con sus ropas gastadas cuando arribaban a las protestas frente al Palacio de Justicia de la Nación. En su mayor parte eran ancianos jubilados, los cuales evitaban invitarme a sus hogares, probablemente por sentir vergüenza por el estado de los mismos; como algunos de ellos me lo confesaron alguna vez, anhelaban recuperar el dinero para, entre otras cosas, invertirlo en el arreglo de sus hogares. La mayor parte ya no trabajaba; otros querían hacerlo, pero no habían podido insertarse nuevamente en el mercado de trabajo, dada su edad; sólo algunos habían conseguido algún empleo, por ejemplo como chóferes de taxi. Muchos habían sido despedidos por las empresas en las que trabajaban. También había entre ellos varios profesionales, y pequeños y medianos empresarios y comerciantes, cuyas empresas o negocios habían quebrado después de muchos años.

Una de mis intereses fue conocer cómo ellos explicaban su decisión de adquirir dólares y/o títulos u otras formas de inversión, a sabiendas que tal decisión había tenido consecuencias aciagas para sus economías. Para la mayor parte de mis interlocutores, el ahorro mediante la compra de dólares no necesitaba ser explicado: siempre habían procedido de esa manera, ellos y sus padres. Muchos recordaban una conocida frase de Lorenzo Sigaut, ministro de Economía en 1981, durante la última dictadura militar: “el que apuesta al dólar pierde”, poco antes de establecer una gran devaluación¹⁹. La posibilidad de invertir los dólares en el mer-

cado financiero fue una alternativa de ahorro de vastos sectores. Luego de las medidas económicas (especialmente de enero de 2002), si bien no faltaban lamentos por no haber retirado sus ahorros de los bancos a tiempo, la mayor parte entendía que tales acciones eran virtuosas, debido a que estaban dirigidas a compensar los magros ingresos de las jubilaciones (ya fuesen en un futuro o en el presente, propias o las de los padres). Las mayores preocupaciones recaían en no poder hacer frente a los riesgos de la vejez, especialmente las enfermedades. Pero las inversiones también eran justificadas como una forma de ahorro que les permitiese pagar una buena educación a sus hijos, e incluso adquirir ciertos bienes que consideraban necesarios y merecidos al cabo de una vida dedicada al esfuerzo y al trabajo, tales como la refacción del hogar o la compra de una nueva vivienda, un automóvil o la realización de un viaje.

Como consecuencia, para quienes fueron más duramente afectados estos deseos no pudieron realizarse tal como habían sido imaginados. Por el contrario, durante los tiempos más duros de la crisis obligaron a realizar fuertes restricciones en los niveles y tipos de gastos. Algunos de mis interlocutores contaban que durante los años 2002 y 2003 debieron restringir o renunciar a gastos habituales, como ir al cine, salir a cenar, ir de compras, o tomarse vacaciones. Claro que había gastos irrenunciables: el mantenimiento del auto, pagar la cuota

del servicio privado de salud, o de la escuela o universidad de los hijos. Pero para otros, las cosas fueron más difíciles. Sus necesidades cotidianas eran de tal magnitud que salir a tomar un café o viajar en taxi constituían lujos imposibles de satisfacer. Las urgencias obligaban a una revisión mayor de los niveles y tipos de gastos. Con gran tristeza contaban cómo debieron suspender los pagos de la medicina y la educación privada, aunque estaban convencidos de que ambas eran superiores a la pública. ¿Debe seguirse de esto que sus decisiones estaban regidas exclusivamente por el cálculo de costos y beneficios?

Numerosas investigaciones han mostrado que el consumo, concebido en un sentido amplio, no puede entenderse sólo como el fruto de una decisión instrumental, como un acto presidido por un cálculo racional, ni tampoco como efectos de impulsos psicológicos individuales. Por el contrario, el gusto o inclinación no puede escindirse de sus condicionamientos sociales: los bienes de consumo coadyuvan en la constitución de las relaciones sociales, son construidos culturalmente y, por tal razón, comunican significados y valores morales (Appadurai, 1996; Bourdieu, 2006; Douglas e Isherwood, 1979; McCracken, 1990; Miller, 1987 y 1999)²⁰.

La población con la que interactué en mi trabajo de campo también se inclinaba por destinar parte de sus gastos a ciertos servicios que consideraba “mejores” o “apropiados”. Esta actividad podría definirse como una forma

de inversión, cuyo rédito residía en la adquisición de una imagen pública, que los ubicaría dentro de una determinada categoría, la cual, a su vez, era diferente, y a menudo opuesta e inferior a otra. Esta actividad no puede sino depender de una moralidad hegemónica que consagra qué es lo apropiado para contraponerlo a lo que no lo es, tornando necesaria u obligatoria la producción de diferenciaciones sociales, que no sólo muestran públicamente lo que se es (o intenta ser), sino simultáneamente lo que no se es. Ahora bien, durante mi trabajo de campo pude corroborar la existencia de una diversidad de modos en que los actores resuelven el lugar que ocupan en el espacio social. Como veremos, de lo que se trata es de una actividad que, bajo los condicionamientos y presiones sociales, intenta por diferentes vías el alejamiento de aquellos lugares moralmente rechazados. Las fronteras no son definidas de una vez para siempre, sino que dependen para su creación y mantenimiento tanto de las posibilidades materiales como del reconocimiento y aceptación que obtengan de las audiencias ante las cuales deban ser ratificadas. Quisiera ilustrar esta proposición centrándome en dos tipos de servicios capitales para cualquier población, y que despertaron las mayores preocupaciones y esfuerzos no sólo de mis interlocutores en el trabajo de campo, sino de una gran parte de los argentinos afectados por los procesos de descenso social: la atención de la salud y la educación.

III. (No) caer en el hospital público

Dado que mis interlocutores eran adultos cuyas edades iban de los 40 años en adelante, tenían temores especiales al envejecimiento y a la enfermedad. Como resulta de algún modo obvio, ellos entendían que envejecer implicaba un mayor riesgo de enfermar; esta inquietud se potenciaba por la condición de jubilados de la mayor parte de ellos o, en todo caso, de estar próximo a adquirir dicho estatus. Para la mayoría, constituía una realidad presente penosa, o una imagen futura realmente terrorífica. Llegar a ser jubilado no sólo era un punto de llegada al que inexorablemente todos arribarían, sino el inicio de un camino de descenso social, debido a los históricamente conocidos bajos haberes. Para ilustrar el notable atraso de las asignaciones de los jubilados, entre el año 2001 y el 2006 los gobiernos nacionales tras la crisis debieron asignar aumentos que alcanzaron un 273% a los haberes mínimos; aunque significativas, estas mejoras no modificaron la percepción que históricamente se ha tenido de las remuneraciones de los jubilados como exiguas.

Además de esto, y del mayor riesgo de enfermarse debido a su edad, mis interlocutores me confesaban que su preocupación recaía en la posibilidad de no poder continuar pagando un servicio de medicina prepaga. En realidad, esta era una realidad que afectó a gran parte de la población argentina entre

finis de 2001 y de 2003. La desocupación creciente despojó a un enorme sector de la posibilidad de contar con el servicio que ofrecían las obras sociales. Pero, además, incidió negativamente en quienes habían contratado un servicio de medicina privada: no sólo resultaba ya insostenible para aquellos que percibían bajos ingresos o estaban desocupados, sino que para muchos tampoco era posible abonar los continuos ajustes de la cuota mensual (Zeballos, 2003: 51-52)²¹. Esto podía significar depender de los servicios de la, por entonces devaluada y muy despreciada, obra social de los jubilados, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI); o, aún peor, de los hospitales públicos. Aunque para parte de mis entrevistados los hospitales públicos contaban con un muy buen personal sanitario, “grandes médicos que hacían lo imposible para brindar una buena atención”, también coincidían en que se trataba de “lugares para pobres”, ya que carecían de insumos y equipamiento, las demoras en la atención eran muy grandes, y el ambiente, usualmente sórdido. Pero, por sobre todo, decían que bastaba ver una sala de espera de esos hospitales para darse cuenta de que, efectivamente, los hospitales públicos “eran lugares para pobres”. Aunque hipotéticamente universal, el sistema público de salud es en la práctica el ámbito que ampara a los sectores que carecen de cobertura de la seguridad social o de posibilidades de pagar un servicio de medicina

privado (Repetto y Alonso, 2004: 15). Muchos de mis interlocutores se quejaban de que miles de residentes del conurbano bonaerense, especialmente inmigrantes bolivianos y paraguayos, se atendiesen en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de hacerlo en sus barrios, lo cual terminaba saturando los turnos disponibles. Al cabo, esto deterioraba la atención. Así, una experiencia de atención en el hospital público podía resultar traumática. Alicia, una jubilada de unos 70 años que vivía en el barrio de Balvanera, me contó:

“Una vez me caí en la calle, me vino a buscar la ambulancia, y me llevó al Hospital Ramos Mejía. Me ingresaron a la guardia, y me dejaron ahí, esperando, en una camilla. Yo veía pasar a la gente y a los médicos que entraban y salían, y nadie me decía nada. En eso, una chica jovencita se acercó y me dijo: Señora, en un ratito le vamos a hacer una plaquita, para ver si hay fractura. Pero seguí esperando, y esperando, y no pasaba nada. Al final, arribaron mis hijos, y se enfurecieron al ver que no me habían atendido. Mi hija en especial, me contó después que cuando vio mi estado, que nadie me atendía, que el lugar daba asco de lo roto y sucio, se metió en la guardia, y luego de preguntarle a la médica jovencita cuánto más habría que esperar, y al no recibir respuesta, le dijo que me iba a sacar de ahí. La médica le dijo que no tenía autorización, que tenía que darme el alta el médico jefe de guardia, pero mi hija no le hizo caso. Llamó a mi hijo, me levantaron, me metieron en el auto, y me lle-

varon al Hospital Británico. Había también mucha gente esperando, pero me hicieron pasar inmediatamente. Me revisaron, me sacaron la placa, y resulta que tenía una fractura en una costilla. Sabés, ahí me di cuenta que tenía que haber ido directamente al Británico, pero los médicos de la ambulancia me llevaron al hospital municipal. Ese tipo de hospitales no es para gente como nosotros, que estamos acostumbrados a otro tipo de vida”.

Alicia no sólo destacaba las diferencias en la atención entre el hospital público y el privado, sino que planteaba que había sido llevada al primero erróneamente. En realidad, al destacar la mala atención del primero y la buena del segundo tenía menos intenciones de demandar una mejor atención del hospital público, que de afirmar que, en verdad, lo que sucedió es que ella fue llevada a un espacio que no le correspondía. El problema fue, precisamente, una *confusión clasificatoria*, que sus hijos se encargaron de corregir de un modo más o menos inmediato.

Del mismo modo, muchos no podían tolerar la mera idea de compartir salas de internación con otros pacientes. Entendían que la medicina privada, además de la posibilidad de elegir dónde o con quién atenderse, les permitía preservar su intimidad. María, una psicóloga de unos 45 años que vivía en un amplio departamento del barrio de Monserrat, me relató que en medio de la crisis, en el 2002, debió someterse a una intervención quirúrgica. Ella contaba

entonces con la obra social de los docentes universitarios, pero desafortunadamente dicha institución no podía cubrirle la operación que necesitaba, exigiéndole una suma de dinero adicional con la que no contaba. Como el tiempo pasaba y esto resultaba riesgoso para su salud, logró a través de la intermediación de un amigo operarse de urgencia con un excelente médico en el Hospital Municipal de Agudos de la ciudad de Buenos Aires, que atendía mayoritariamente a los pacientes de la obra social de Buenos Aires (por ejemplo, a los empleados del gobierno de la ciudad). Aunque la operación fue exitosa y ella recobró su salud, recordaba que la alojaron en una sala con otras tres mujeres mucho mayores que ella, de las cuales dos padecían cáncer. María revivía con su relato no sólo el sufrimiento de esas mujeres, sino la angustia y el asco que le produjo tener que compartir el mismo espacio donde ellas tosían, orinaban o defecaban a su vista. En algunos momentos, sus eventuales compañeras intentaban mantener alguna conversación, pero María, en más de una ocasión, simulaba estar dormida. Después de esa experiencia, cuando algunos años después su situación económica mejoró, María no dudó en asociarse a una empresa de medicina privada. “Me juré que nunca más volvería a pasar por algo así”.

Para muchos de mis interlocutores empobrecidos, conservar su servicio de medicina privada era algo tan importante que eran capaces de acudir a las más extremas estrategias, pos-

tergando otros gastos. Así lo hacían Mario y Sara, un matrimonio de jubilados de más de 80 años que vivía en el barrio de Flores. Ellos eran parte de los “nuevos jubilados”, que habían logrado acceder al beneficio estatal en el 2005, sin haber realizado aportes previsionales durante su vida laboral²². Sus magros haberes no les habían permitido cubrir el costo mensual del servicio (aproximadamente, 300 dólares), sin afectar seriamente sus restantes necesidades (fundamentalmente, alimentación). Por tal motivo, acudían a sus dos hijos, profesionales, quienes se hacían cargo de los costos. En más de una ocasión, estos últimos habían intentado convencer a sus padres de abandonar el servicio de medicina prepago, y depender enteramente de la obra social de los jubilados, ya que los costos aumentaban cada vez más, y muchas veces les resultaba difícil pagarlos. Sin embargo, siempre se mostraron renuentes a acceder a este pedido. Al mismo tiempo, Mario, Sara y sus hijos no tenían reparos en calificar a la empresa prestadora como una “abusadora que lucraba con la salud”; pero esta condena moral no los conducía a abandonarla. “No podemos quedarnos sin nada”, afirmaban resignadamente.

También conocí a profesionales que habían perdido toda cobertura médica. Este era el caso de Omar, un ingeniero de más de 60 años que estaba al frente de una consultora, la cual había quebrado en el año 2000. Tras vender su empresa junto a un grupo de socios, Omar trató de

insertarse infructuosamente en el mercado de trabajo, y en un momento determinado se encontró viviendo sólo de la renta de sus ahorros. Esto se complicó seriamente a partir del 2001. Para peor, contrajo cáncer, y para hacer frente a los gastos que insumían los estudios y el tratamiento acudió a familiares y amigos. Finalmente, no tuvo otra salida que continuar con su tratamiento en un hospital público.

En general, mis interlocutores entendían que quienes acudían al hospital público lo hacían porque “no tenían nada”. Para quienes intentaban evitar por diferentes medios recurrir a dicha alternativa (la expresión usual era y es “caer en el hospital público”) o a la obra social de los jubilados (“por nada del mundo dejes que tus padres terminen en el PAMI”, me decía Norberto, un investigador y profesor de ciencias sociales, hijo de uno de mis interlocutores), los límites físicos del hospital público o el ingreso a la órbita de la obra social de los jubilados demarcaban la frontera de un espacio al cual nunca deberían ingresar. Ese dominio perteneciente a los pobres afloraba peligrosamente en el horizonte de quienes veían descender sus ingresos o niveles de vida; y, así, amenazaba destruir la privacidad hogareña que debía, necesariamente, prolongarse en el espacio de las clínicas y sanatorios, en la eventualidad de que algún miembro de la familia necesitase una internación. Por eso, los planes privados de salud (y algunas de las obras sociales) debían garantizar que, en caso

de necesitar internación, el paciente contase con una habitación privada²³.

Como vemos, la atención médica privada constituía un valor a defender, para lo cual resultaba muchas veces inevitable renunciar a otros gastos. Por supuesto, este esfuerzo era presentado generalmente bajo una forma racionalizada: muchos de mis interlocutores sostenían que por tratarse de un servicio por el que debían pagar, recibirían necesariamente una mejor atención. Incluso, algunos de mis entrevistados se atendían con médicos de su obra social; pero cuando disponían del dinero, preferían realizar las consultas en sus consultorios privados, no en las clínicas. A su vez, entendían que los médicos trabajarían de otro modo fuera de los hospitales públicos, al tener mejores ingresos. Pensaban que las clínicas, sanatorios y laboratorios de análisis clínicos contarían con un equipamiento moderno y adecuado, del cual carecía el sistema público. De tal modo, optar por atenderse en el espacio del hospital público era un sinónimo de insensatez. Independientemente de lo fundados o no de estos argumentos (de hecho, no siempre resulta cierto que las empresas de medicina privada o las obras sociales abonen mejores pagos a los médicos), para mis interlocutores la exigencia de llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para mantener el servicio de medicina privado o la obra social se basaba en la idea de que el hospital era un espacio extraño, el cual no les correspondía.

IV. La búsqueda de “mejores ambientes” escolares

Como hemos visto, una de las formas principales mediante las que mis interlocutores justificaban sus decisiones de “ahorrar” mediante inversiones financieras en dólares residía en la necesidad de brindar una mejor educación para sus hijos, o eventualmente nietos. Obviamente, se estaban refiriendo a la educación privada, la cual resultaba valorizada sobre la educación pública. Entre el año 2003 y el 2010 creció la proporción de asistentes a las escuelas privadas en un 3,6%, mientras que descendió un 2,3% el porcentaje de concurrentes a la escuela pública. De todos modos, el concepto de “escuela privada” requiere algunas precauciones, puesto que incluye desde escuelas confesionales hasta escuelas de elite. Hay escuelas parroquiales que son subsidiadas en un 100% por el Estado nacional o por los provinciales y, por lo tanto, son gratuitas. Durante la mayor parte del año 2011, algunos colegios cobraron cuotas mensuales muy bajas (entre 150-300 pesos, esto es, 3,50 o 4 dólares), mientras que una gran proporción cobra cuotas entre 500 y 1.000 pesos (entre 119 y 238 dólares) y, finalmente, algunos de elite llegaron a más de 4.100 o 5.000 pesos (976 a 1.190 dólares), e inclusive superiores.

A pesar de algunas convergencias, existe una diferencia significativa entre la elección de los servicios de medicina privada y la educación privada. Mientras que desde la perspectiva de

mis interlocutores, coincidente con la de vastos sectores de la sociedad argentina, la salud pública es sensiblemente inferior a la medicina privada, por el contrario, la educación pública no es vista necesariamente por todos como inferior a la privada. Las mismas personas que denostaban a la salud pública, eran capaces de elogiar y defender a la educación pública. Estaban incluidos en este grupo no sólo aquellos que contaban con otra alternativa a la de enviar a sus hijos a escuelas estatales, sino incluso sectores que disponían de ingresos que les hubieran permitido enviarlos a escuelas o universidades privadas.

Las razones de esta adhesión son complejas, y exceden los límites y posibilidades de este artículo; no obstante, no puede pasarse por alto el hecho de que la educación pública en Argentina ha sido concebida desde sus inicios como un espacio abierto a todos, con pretensiones universalistas y propiciadoras de la igualdad y la movilidad social ascendente. Por supuesto, estas características ideales han sido siempre fuertemente condicionadas por las vicisitudes de los procesos económicos, que ora expulsaron a los sectores empobrecidos de todo el sistema educativo, o llevaron a la transformación de las funciones de este último para atender demandas tales como la subsistencia, como aconteció durante la década de 1990. Pero las masivas protestas que encabezaron diferentes sectores del sistema educativo en todos sus niveles durante los gobiernos de Menem y de la

Rúa, son una prueba del alto consenso que ha gozado la educación pública, aún en situaciones sociales definidas como críticas. Norberto (el mismo que me aconsejaba no dejar a mis padres en el PAMI) me contaba que aunque él había contado con dinero para enviar a sus hijos a una escuela privada, prefería que estudiaran en la escuela pública, ya que ahí entraban en contacto con niños de otra condición social, y eso en definitiva constituía un enriquecimiento para ellos.

De todos modos, hablar del sistema público de la educación como un todo homogéneo puede resultar engañoso. Considerando sólo el caso de la ciudad de Buenos Aires, existe una dispar oferta educativa en los niveles primarios y secundarios, la capacidad pedagógica de los docentes, la infraestructura edilicia o las actividades extracurriculares. Ciertamente, esta diversidad depende en demasía de las posibilidades económicas de las familias de los alumnos, quienes usualmente realizan contribuciones voluntarias que les permiten a las instituciones de nivel primario (y a veces secundario) contar con recursos extras, independientemente de los aportados por el Estado. A su vez, las condiciones económicas, sociales y urbanas de cada zona incidirán en las posibilidades de cada escuela.

El período 1997-2003 había mostrado una recuperación de la matrícula de las escuelas públicas de gestión estatal. En 1997, la asistencia a establecimientos públicos estaba en el orden del 74,6%. Junto con la recuperación

económica evidenciada a partir del 2003, la tendencia cambió, produciéndose una caída en la asistencia a los establecimientos públicos: 77,7% en el 2003, y 72,6% en el 2006. La mayor asistencia a los escuelas públicas fue de los hijos de las familias más pobres de la sociedad, aunque se mantuvo en las mencionadas escuelas un porcentaje menor de las familias más ricas (Gamallo, 2008). Si las estadísticas sugieren una conexión causal indudable entre la situación socio-económica y la asistencia a escuelas públicas o privadas, el análisis cualitativo ofrece un cuadro en el que es posible apreciar las prácticas y percepciones de los actores referidas a sus decisiones vinculadas con la asistencia de sus hijos a escuelas estatales o privadas.

En los años de la crisis fue usual que muchas familias decidiesen cambiar a sus hijos a escuelas públicas, debido a la imposibilidad de pagar los aranceles de las escuelas privadas. En 2004, Nadia, una psicóloga de unos 40 años que trabajaba en un equipo de orientación escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me contó que durante los años que siguieron a la crisis mucha gente se acercó para solicitar el ingreso de sus hijos a escuelas estatales. Según el relato de algunos de mis interlocutores, durante la segunda mitad de los años 1990 y los primeros años que siguieron a la crisis del 2001 muchos padres que hasta ese momento habían enviado a sus hijos a escuelas privadas se vieron obligados a cambiarlos a escuelas estatales.

Pero ante esta emergencia, fueron fuertemente selectivos.

Una buena parte de estos padres eran profesionales liberales (médicos, abogados, psicólogos, arquitectos), pero había también profesores o investigadores en universidades públicas o en organismos estatales de investigación. Durante los años noventa habían tenido un buen pasar: habían comprado en cuotas las últimas marcas de electrodomésticos; algunos habían remodelado sus casas, o incluso habían logrado mudarse a mejores barrios; también, tenían la costumbre de gastar en salidas al cine, al teatro o a restaurantes; finalmente, uno de los mayores placeres consistía en ahorrar para las vacaciones de verano (por ejemplo, alquilando casas en Argentina o en Uruguay), e incluso para algún viaje de placer a algún lugar más lejano. Sus niveles de exigencia respecto a lo que entendían debía ser una “buena educación” eran muy altos. Nadia recordaba que estos padres le habían consultado qué escuelas tenían mejores docentes, o más actividades extracurriculares, o se tenía mejores niveles de enseñanza del idioma inglés. A estas consultas se sumaban también preguntas tales como “qué escuelas tenía mejor ambiente”, lo que significaba, según Nadia, “sin población de villas miseria”.

Las pretensiones y la selectividad pueden rastrearse también en la decisión de algunos padres de sacar a sus hijos de las escuelas públicas de los barrios del sur de la Ciudad de

Buenos Aires, próximas a sus residencias, para reubicarlos en escuelas estatales de barrios de la zona norte. Esto les exigía levantarse más temprano para llegar a horario, atravesar mayores distancias, viajar en autobuses repletos o, a veces, utilizar taxis. En ocasiones, todo esto implicaba gastar más dinero. Pero este movimiento del sur al norte de la ciudad (aunque más no fuese para llevar a los chicos a la escuela) era vivido como una forma de ascenso social, y sobre todo una diferenciación respecto a los vecinos que continuaban enviando a sus hijos a las escuelas estatales del barrio. La misma Nadia, la psicóloga, quien vivía en Balvanera, había optado a inicios del 2001 cambiar a su pequeña hija a una escuela de Palermo.

“¿Por qué lo saqué? Bueno, yo conocía mucho la realidad de las escuelas de la ciudad, y desde hacía varios años el nivel había caído muchísimo. Además, el ambiente se había puesto feo, había muchos chicos que venían de familias con muchos problemas, en las que hasta había padres alcohólicos o madres que se dedicaban a la prostitución. Yo comprendía la situación social de esas familias, porque muchas veces las tenía que visitar, por mi trabajo. Pero la cosa se complicaba mucho cuando la invitaban a mi hija a jugar a sus casas, ella percibía que el clima no era el mejor. El cambio fue para mejor. Conoció otros chicos, con los que se llevó bárbaro. La adaptación fue muy rápida. Había un muy buen nivel de maestros, tenían

muchas actividades extracurriculares. Lo más complicado era llevarlo y después traerlo. Como yo trabajaba cerca de la escuela, la mayoría de las veces lo llevaba yo; mi marido también trabajaba por la zona, así que a veces lo llevaba él. Mientras pudimos, tomamos un taxi, pero después nos acostumbramos a tomar el colectivo. Ir a buscarlo también a veces podía ser complicado, pero a pesar de todo estamos muy contentos, porque el cambio fue para mejor”.

Por otra parte, a medida que la situación económica fue mejorando en el primer lustro del 2000, otras familias no muy alejadas socioeconómicamente de las que he presentado hasta aquí volvieron a considerar la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas privadas. Silvina, otra profesora universitaria de humanidades de unos 40 años, también había comenzado enviando a su hijo a una (presuntamente) buena escuela de la zona de Palermo, por recomendación de Nadia; a comienzos del 2001, parecía la mejor opción en tiempos de crisis. Sin embargo, poco después lo sacó, ya que –decía– el chico perdía muchas horas de clase por las huelgas de los maestros. Aún más: quería otro tipo de educación para su hijo, especialmente que aprendiese inglés seriamente; pensaba que ella había tenido que aprender inglés ya siendo mayor, y no quería que le sucediese lo mismo a su hijito. Apenas mejoró un poco su situación económica hacia el 2005, consiguió la posibilidad de que ingresara a una escuela privada bilingüe, también del barrio de Palermo. Pero

afrontar los costos económicos de tal decisión no fue una tarea fácil: se vio obligada a solicitar a las autoridades de la escuela una beca, que finalmente obtuvo, la cual le cubría sólo una parte de la cuota mensual. Por eso, debió recurrir también a la ayuda de sus padres, al tiempo que privarse de otros gastos. Pero no terminaban allí sus contratiempos. La vida social de su hijo había cambiado drásticamente; cada invitación a un cumpleaños exigía gastar mucho dinero en regalos de marcas caras. No obstante, no todas las diferencias entre su hijo y sus compañeros de colegio eran sencillas de eliminar. Los niños referían a bienes de consumo, o a lugares y tiempos de ocio que resultaban completamente extraños o inaccesibles, todo lo cual le terminaba produciendo mucha frustración.

Bianca y Hernán, un matrimonio de psicoanalistas que en 2004 tenían unos 40 años, también habían optado inicialmente por enviar a sus hijos pequeños a una escuela primaria pública. Ante mí, y en modo parecido a Nadia, se quejaron de la existencia de una alta dosis de violencia en las relaciones entre los chicos de la escuela, debido a que muchos provenían de hogares muy pobres, con padres ausentes, conviviendo con situaciones de violencia doméstica, delito, droga, alcoholismo o prostitución. Ellos hablaban de “la decadencia o degradación de la escuela pública”, haciendo especial hincapié en la presencia de esta población de chicos provenientes de sectores sociales “marginales” que, en definitiva, terminaban desvirtuando el espa-

cio. Esto fue lo que los llevó a cambiarlos a una escuela privada, aunque no de elite, como en el caso de Silvina. Según Bianca, mucho tuvo que ver la presión de su esposo, quien siempre decía que “quería otra cosa para sus hijos”.

En buena parte de estos casos, se trataba de personas que en su niñez y juventud habían cursado sus estudios primarios y secundarios en el sistema público, pero se justificaban a sí mismos sosteniendo que la escuela pública había cambiado mucho, que ya no era lo que alguna vez había sido. De igual forma, casi todos se habían formado en universidades públicas (de hecho, la mayor parte eran egresados de la Universidad de Buenos Aires); más de uno se desempeñaba como docente de dichas universidades, y habían participado de las protestas de la década de 1990 defendiendo a la educación pública. Pero algunos de ellos habían elegido enviar a sus hijos a universidades privadas²⁴.

Como puede advertirse, los actores pusieron en práctica una serie de estrategias tendientes a delimitar su localización en el espacio social, lo cual implicaba, paralelamente, separación y diferenciación. Estas estrategias podían operar dentro mismo del espacio de la escuela pública (diferenciando, así, escuelas estatales apropiadas de escuelas inadecuadas), o entre escuelas públicas y escuelas privadas, o en el mismo espacio de las escuelas privadas. Esta lógica clasificatoria dependía de definiciones colectivas acerca de “ambientes escolares”, o “buenas escuelas”, pero la misma no

era aplicada necesariamente del mismo modo para los mismos espacios. Esta variabilidad dependía tanto de las posibilidades de percibir ámbitos diferenciados, en función de sus atributos basados en el honor y el prestigio, como de las capacidades económicas para poder solventar los costos demandados por las decisiones. De este modo, el ascenso social también puede ser concebido no sólo como un camino orientado hacia un destino exitoso, sino como una continua huida de la amenaza del fracaso.

V. Conclusiones

El empobrecimiento masivo y las experiencias de descenso social que vivió la sociedad argentina durante la década de 1990 y los comienzos del 2000, han incidido especialmente en las condiciones, estilos de vida, e identidades de clase media. Estos efectos fueron objeto de un renovado interés sociológico, centrado en estudiar los cambios producidos tanto en la dimensión estructural como ideológica e identitaria. De modo especial, estas investigaciones abordaron la emergencia de los llamados “nuevos pobres”, es decir, individuos que habían pertenecido a estratos considerados “de clase media”, pero que habían descendido socialmente, al punto de equipararse a los estratos tradicionalmente más humildes de la sociedad, denominados “pobres estructurales”. Algunos de los trabajos señalaban que estábamos

asistiendo a un proceso de mutación e incluso desaparición de la clase media: si Argentina había sido vista hasta allí como un país de clase media y, por lo tanto, más próximo en sus características a los países de Europa Occidental, ahora se había aproximado contundentemente al resto de los países latinoamericanos. Esta cercanía al fin de la clase media no sólo era evidente en los drásticos y a menudo dramáticos cambios en las condiciones de vida de las personas, sino que su misma identidad social había sido deteriorada.

No obstante, los mismos trabajos sociológicos muestran que las alteraciones estructurales no encuentran una correspondencia inmediata en el plano de las identidades sociales. En efecto, aunque los individuos perciban su situación de descenso social, esto no los ha llevado automáticamente a percibirse como iguales a los señalados “pobres estructurales”. Por supuesto que un fuerte descenso en el nivel de vida es una precondition para adscribirse como “pobre”, o al menos “cercano a los pobres”. Pero, como bien muestran los estudios sociológicos, aun en esas circunstancias es posible apelar a principios de diferenciación, vistos como categóricos, tales como el nivel de educación adquirido, la valorización de ciertos conocimientos o el consumo de bienes culturales. Ahora bien, la dificultad que presentan los estudios de la “nueva pobreza” radica en suponer algún tipo de desajuste entre el nivel estructural u objetivo, y las percepciones de la propia situación, las iden-

tificaciones colectivas y las elaboraciones simbólicas que tratan de hacer inteligibles las condiciones de vida, que explicaría la no necesaria correspondencia. La razón de ello reside en que presumen que “clase media” o “nueva pobreza” son condiciones, en gran medida engendradas por los factores estructurales. Sin embargo, son los recursos culturales los que permiten a los actores hacer asequible su condición, los cuales cumplen un rol singular bajo circunstancias críticas (Sztompka, 2000).

En el caso de los procesos de descenso social vividos por amplias capas de la sociedad argentina en el curso de la década de 1990 y comienzos de la del 2000, las experiencias y percepciones de empobrecimiento de los actores fueron acompañadas de *prácticas de diferenciación* de quienes, estaban convencidos, siempre debían estar separados. Bajo las circunstancias críticas que le ha tocado vivir a la sociedad argentina durante el período señalado, las fronteras sociales se tornaron particularmente endeble e incluso porosas, por lo que demandó un esfuerzo especial por repararlas o conservarlas. Mi propósito a lo largo de este trabajo ha sido exponer la actividad socialmente condicionada constituida por la identificación o percepción de los límites sociales, su reparación, fortalecimiento o renovación. Basándome en mi trabajo de campo, me concentré primordialmente en las diferentes respuestas brindadas por miembros identificados por sí mismo o por otros como “clase media” ante las

dificultades surgidas en las apuntadas circunstancias críticas, con el fin de conservar o conseguir una cobertura de salud específica (preponderantemente privada) o una educación para sus hijos, en un caso u otro, vistas como *apropiadas*.

Como puse de manifiesto, la pérdida de una cobertura de salud privada y la posibilidad de tener que recurrir al hospital público (o eventualmente a la obra social de los jubilados) eran vistas trágicamente, como una desgracia. En efecto, si bien también era posible para muchos advertir que algunos hospitales públicos eran sensiblemente mejores que otros, esto no los llevaba a desprenderse de su cobertura privada de salud: aunque algunos fuesen mejores, *los hospitales públicos siempre habrían de ser espacios para los pobres*. La conservación (a veces desesperada) del servicio de medicina privada (y en modo semejante, la decisión de enviar a los hijos a escuelas privadas), no contando con los ingresos suficientes, obligaba a inusitadas estrategias que podían abarcar tanto la apelación a las redes familiares (padres que ayudaban a sus hijos, o viceversa) como la reducción de otros tipos de gastos.

Por su parte, la educación pública seguía siendo un valor central para muchos, lo que en más de una ocasión estaba asociado a la imposibilidad económica de enviar a los hijos a escuelas privadas. De todos modos, el sistema público de educación, en los niveles primario o secundario, ofrecía alternativas que podían ser

consideradas como adecuadas. Como hemos visto, era posible emplear altas dosis de energía, o incrementar los gastos, con tal de alejarse de aquellas escuelas públicas que, por estar colmadas de pobres, comprometían severamente el posicionamiento y la diferenciación social. Por ende, un tiempo mayor invertido en el desplazamiento entre zonas diferentes de la ciudad, o un incremento en el nivel de gastos de transporte eran vistos como algo razonable, en la medida que los hijos podían ser ubicados *en el lugar correcto*, al tiempo que *los alejaban de aquel sitio en el que nunca debieron estar*. Como en el caso de las estrategias de separación del hospital público, *lo que prevalece es un rechazo a toda mezcla*. Este movimiento de alejamiento transitorio del barrio en el que residían hacia zonas vistas como superiores constituye una estrategia de diferenciación y homologación a la que acuden también quienes eligen ciertos ámbitos urbanos para sus tiempos de ocio, tales como restaurantes o centros comerciales (Visacovsky, 2008: 20-23)²⁵. La decisión de enviar a los hijos a escuelas privadas prolongaba la misma lógica expuesta hasta aquí, y que regía la diferenciación entre escuelas públicas; sólo que en este caso, todo el sistema de educación pública era rechazado.

En comparación con los resultados expuestos por los estudios sociológicos sobre la “nueva pobreza”, donde son enfatizados los cambios estructurales y culturales acontecidos debido a las transformaciones de la estructura

económica de Argentina, es posible que lo expuesto en este trabajo pueda ofrecer la imagen de una naturaleza inalterada de la clase media. Pero en tanto actividad, la demarcación de fronteras recurre a los recursos culturales disponibles (como precondiciones sociales e históricas), pero debe aplicarles a condiciones actuales. No existe un único modo de definición de los límites sociales, ni un sólo tipo de límite: por eso, algunos intentan trazar la demarcación en el mismo espacio de las escuelas públicas, mientras que para otros eso resulta inadmisiblemente. Como vemos, esto diferencia a las prácticas de construcción de fronteras sociales, de la idea de la clase social como categoría clasificatoria que reúne una población a la que se le atribuyen propiedades comunes, y con límites precisos e inalterados.

No obstante, lo que sí revela mi indagación es que la tarea cotidiana de (re)definición de límites sociales representa, ciertamente, un esfuerzo de afirmación ante las amenazas desintegradoras de las contingencias y las crisis. En su estudio sobre la vida de la clase media en Sao Paulo en el contexto de la crisis de comienzos de los años 1990, Maureen O'Dougherty mostró que las personas no dejaban de conceder relevancia a las cuestiones vinculadas al honor, y a vigilar sus estilos de vida. Contra lo que indicaría un análisis "racionalista" más atento al modo en que los actores optimizan sus ingresos en relación con sus gastos, durante una crisis como la señalada la gente reforzó sus

tácticas de adscripción a la clase media (O'Dougherty, 2002). En un modo similar, las transformaciones sociales desde los años 1990 en Argentina dieron lugar a una compleja y heterogénea realidad, a la cual los investigadores sociales han intentado ordenar mediante sus sistemas clasificatorios científicamente fundados. Esta misma exigencia de orden es la que se presenta a los actores en la vida cotidiana, y lo que lleva a su tarea de constante definición de las fronteras sociales. Es la insistencia por la definición de tales límites, separándose de aquellos con quienes no debe haber mezcla alguna, lo que pone de manifiesto la vigencia de algunas preocupaciones constitutivas del proyecto de clase media en Argentina.

Referencias bibliográficas

- ADAMOVSKY, Ezequiel (2009). *Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión*. Buenos Aires, Planeta.
- APPADURAI, Arjun (1996). *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. México, Editorial Grijalbo.
- ARIZAGA, María Cecilia (2000). "Murallas y barrios cerrados. La morfología espacial del ajuste en Buenos Aires". *Nueva Sociedad* 166, pp. 22-32.
- ARIZAGA, María Cecilia (2004). "Espacialización, estilos de vida y clases medias: procesos de suburbanización en la RMBA". *Perfiles Latinoamericanos* 12 (25), pp. 43-58.
- AUYERO, Javier (2000). "The Hyper-Shantytown: Neo-Liberal Violence(s) in the Argentine Slum". *Ethnography* 1 (1), pp. 93-116.
- BOURDIEU, Pierre (2006). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus.
- BRIONES, Claudia, FAVA, Ricardo y Ana ROSAN (2004). "La politización de los indefinidos como clave para pensar la crisis argentina". En: GRIMSON, Alejandro. (comp.) *La cultura en las crisis latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO, pp. 81-105.
- DINERSTEIN, Ana. C. (2003). "¿Que se Vayan Todos! Popular Insurrection and the Asambleas Barriales in Argentina". *Bulletin of Latin American Research* 22, pp. 187-200.
- DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron (1979). *El Mundo de los Bienes. Hacia una antropología del consumo*. México, Editorial Grijalbo.
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (1999). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (2002). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Producción.
- FERNANDES, Leela y HELLER, Patrick (2006). "Hegemonic Aspirations. New Middle Class Politics and India's Democracy in Comparative Perspective". *Critical Asian Studies* 38(4), pp. 495-522.
- FRIEDMAN, Jonathan, ed. (2003). *Globalization, the State, and Violence*. Walnut Creek, CA, Altamira Press.
- FURBANK, Philip Nicholas (2005). *Un placer inconcesable o la idea de clase social*. Buenos Aires, Paidós.
- GAMALLO, Gustavo (2008). *Variaciones en el acceso a la educación de gestión estatal y privada en Argentina (1997-2006)*. Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), Documento de Trabajo N° 2.
- GERMANI, Gino (1942). "La clase media en la ciudad de Buenos Aires: Estudio preliminar". *Boletín del Investigaciones del Instituto de Sociología* 1, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, pp. 105-126.
- GERMANI, Gino (1961). "Estrategia para estimular la movilidad social". *Desarrollo Económico* 1 (3), pp. 59-96.
- GODDARD, Victoria (2006). "This Is History": Nation and Experience in Times of Crisis-Argentina 2001". *History and Anthropology* 17(3), pp. 267-286.
- GÓMEZ, Marcelo (2006). "Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004". *Revista Argentina de Sociología* 4 (6), pp. 88-128.
- GÓMEZ, Marcelo (2009). "Variaciones sobre dos inventos argentinos: escrache y corralito. El caso de la estrategia de guerra a los bancos del Movimiento de Ahorristas Estafados de Mar del Plata". *Revista de Ciencias Sociales* 16, pp. 125-146.
- GONZÁLEZ BOMBAL, Inés y SVAMPA, Maristella (2001). "Movilidad social ascendente y descendente en las clases medias argentinas: un estudio comparativo". *Serie Documentos de Trabajo* 3. Buenos Aires, SIEMPRO, Secretaría de Tercera Edad y Acción Social, Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
- GONZÁLEZ BOMBAL, Inés (2002). "Sociabilidad en clases medias en descenso: experiencias en el trueque". En: BECCARIA, Luis; FELDMAN, Silvio; GONZÁLEZ BOMBAL, Inés; KESSLER, Gabriel; MURÁIS, Miguel y SVAMPA, Maristella (eds.)

- Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los 90*. Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento-Biblos, pp. 97-136.
- GRIMSON, Alejandro (2004). "La experiencia argentina y sus fantasmas". En GRIMSON, Alejandro. (comp.) *La cultura en las crisis latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO, pp. 177-193.
- GUANO, Emanuela (2002). "Spectacles of Modernity: Transnational Imagination and Local Hegemonies in Neoliberal Buenos Aires". *Cultural Anthropology* 17, pp. 181-209.
- GUANO, Emanuela (2003). "A Color for the Modern Nation: The Discourse on Education, Class, and Race in the Porteño Opposition to Neoliberalism". *Journal of Latin American Anthropology* 8(1), pp. 148-171.
- HINTZE, Susana (comp.) (2003). *Trueque y economía solidaria*. Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento y Prometeo.
- KESSLER, Gabriel (1999). "L'expérience de paupérisation de la classe moyenne argentine" *Cultures & Conflits* 35 http://conflits.revues.org/index_173.html
- KESSLER, Gabriel y ESPINOZA, Vicente (2003). *Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires*. División de Desarrollo Social, CEPAL, *Serie Políticas Sociales* N° 66.
- KESSLER, Gabriel y María Mercedes DI VIRGILIO (2008). "La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas". *Revista de la CEPAL* 95, pp. 31-50.
- LAMONT, Michele y Marcel FOURNIER (1992). "Introduction". En: LAMONT, Michele and Marcel FOURNIER (eds.). *Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality*. Chicago and London, University of Chicago Press, pp. 1-17.
- LAMONT, Michele y Virag MOLNAR (2002). "The Study of Boundaries in the Social Sciences". *Annual Review of Sociology* 28, pp. 167-195.
- LÓPEZ, Artemio y ROMEO, Martín (2005). *La declinación de la clase media argentina. Transformaciones en la estructura social (1974-2004)*. Buenos Aires, Libros de Equis.
- LUTZ, Catherine y Donald NONINI (1999). "The economies of violence and the violence economies". En: MOORE, Henrietta (ed.). *Anthropological Theory Today*. Cambridge, Polity Press, pp. 77-113.
- LVOVICH, Daniel (2000). "Colgados de la soga. La experiencia del tránsito desde la clase media a la nueva pobreza en la ciudad de Buenos Aires". En: SVAMPA, Maristella (ed.) *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires, Biblos, pp. 51-79.
- MACEIRA, Daniel (2008). *Crisis Económica, Política Pública y Gasto en Salud: La experiencia Argentina*. CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). <http://www.danielmaceira.com.ar/pdfs/Maceira-GstoSaludArg2005-BriefCIPPEC.pdf>.
- MCCRACKEN, Grant (1990). *Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities*. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- MILLER, Daniel (1987). *Material Culture and Mass Consumerism*. Oxford, Basil Blackwell.
- MILLER, Daniel (1999). *Ir de compras. Una teoría*. México, Siglo XXI.
- MINUJIN, Alberto y LÓPEZ, Néstor (1994). "Nueva Pobreza y Exclusión. El caso Argentino". *Nueva Sociedad* 131, pp. 88-105.
- MINUJIN, Alberto (1995). "Squeezed: the middle-class in Latin America". *Environment and Urbanization* 7 (2), pp. 153-165.
- MINUJIN, Alberto (1997). "Estrujados: la clase media en América Latina". En: KLIKSBERG, Bernardo (ed.). *Pobreza, un tema impostergable*. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 213-234.
- MINUJIN, Alberto y Gabriel KESSLER (1995). *La nueva pobreza en la Argentina*. Buenos Aires, Editorial Planeta.
- MINUJIN, Alberto y Eduardo ANGUIA (2004). *La clase media, seducida y abandonada*. Buenos Aires, Edhasa.

- O'DOUGHERTY, Maureen. (2002). *Consumption Intensified: The Politics of Middle-Class Daily Life in Brazil*. Durham NC, Duke University Press.
- PÁGINA 12 (2004). "Adiós al país de clase media". 26 de octubre.
- PÍREZ, Pedro. (2002). "¿Qué pasó en la Argentina? Algunas piezas de un rompecabezas para intentar entender". *Estudios Sociológicos* 20 (2), pp. 455-467.
- REPETTO, Fabián y ALONSO, Guillermo V. (2004). *La economía política de la política social argentina: una mirada desde la desregulación y la descentralización*. Santiago de Chile, División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Políticas Sociales 97.
- RODGERS, Dennis (2005). *Unintentional democratisation? The argentinazo and the politics of participatory budgeting in Buenos Aires, 2001-2004*. Crisis States Research Centre working papers series 1, 61. Crisis States Research Centre, London School of Economics and Political Science. <http://eprints.lse.ac.uk/13322/1/wp61.pdf>.
- ROSSI, Federico Matías (2005a). "Las asambleas vecinales y populares en la Argentina: las particularidades organizativas de la acción colectiva contenciosa". *Sociológica* 19 (57), pp. 113-145.
- ROSSI, Federico Matías (2005b). "Crisis de la república delegativa. La constitución de nuevos actores políticos en la Argentina (2001-2003): las asambleas vecinales y populares". *América Latina Hoy* 39, pp. 195-216.
- SOSA-ESCUADERO, Walter y Sergio PETRALIA (2010). *I Can Hear the Grass Grow: The Anatomy of Distributive Changes in Argentina*. Documento de Trabajo 106. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Maestría en Economía, Universidad Nacional de La Plata.
- SVAMPA, Maristella (2001). *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados*. Buenos Aires, Biblos.
- SVAMPA, Maristella (2002). "Las nuevas urbanizaciones privadas". En: BECCARIA, Luis; FELDMAN, Silvio; GONZÁLEZ BOMBAL, Inés; KESSLER, Gabriel; MURÁIS, Miguel y SVAMPA, Maristella (eds.) *Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los 90*. Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento-Biblos, pp. 55-95.
- SVAMPA, Maristella (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires, Taurus.
- SZTOMPKA, Piotr (2000). "Cultural Trauma. The Other Face of Social Change". *European Journal of Social Theory* 3(4), pp. 449-466.
- TEUBAL, Miguel. (2004) "Rise and collapse of Neoliberalism in Argentina. The role of economic groups". *Journal of Developing Societies* 20(3-4), pp. 173-188.
- TEVIK, Jon (2007). *Porteñologics. Sobre gusto y diferenciación social entre los porteños*. Buenos Aires, Antropofagia.
- VISACOVSKY, Sergio E. (2008). "Estudios sobre 'clase media' en la antropología social, una agenda para la Argentina". *Avá Revista de Antropología* 13, pp. 9-37.
- VISACOVSKY, Sergio E. y Enrique GARGUIN (2009). "Introducción". En: VISACOVSKY, Sergio E. y Enrique GARGUIN (compiladores). *Moralidades, economías e identidades de clase media. Estudios históricos y etnográficos*. Buenos Aires, Antropofagia, pp. 11-59.
- VISACOVSKY, Sergio E. (2009). "Imágenes de la 'clase media' en la prensa escrita argentina durante la llamada 'crisis del 2001-2002'". En, VISACOVSKY, Sergio E. y Enrique GARGUIN (compiladores). *Moralidades, economías e identidades de clase media. Estudios históricos y etnográficos*. Buenos Aires, Antropofagia, pp. 247-278.
- VISACOVSKY, Sergio E. (2010). "Hasta la próxima crisis". *Historia cíclica, virtudes genealógicas y la identidad de clase media entre los afectados por la debacle financiera en la Argentina (2001-2002)*. Documentos de Trabajo-División de Historia 68, División de Historia del Centro de

Investigación y Docencia Económicas. México DF. <http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTH%2068.pdf>.

WORTMAN, Ana (2001). "Globalización cultural, consumos y exclusión social". *Nueva Sociedad* 175, pp. 134-142.

WORTMAN, Ana (comp.) (2003). *Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa*. Buenos Aires, La Crujía ediciones.

ZEBALLOS, José Luis (2003). *Argentina: efectos sociosanitarios de la crisis 2001-2003*. Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud.

ZENOBI, Diego (2006). "Ahorristas de vacaciones: de Villa Gessell al HSBC. Moralidades, familia y nación". *Anuario del Centro de Antropología Social -IDES*. Buenos Aires, pp. 216-234.

Notas

- * El presente trabajo está basado en la investigación “Coping with Catastrophe: An Ethnography of the Argentine Middle Class in Crisis”, financiado por la Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research (WOTRO), de The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), entre 2004-2006; prolongada luego con el Subsidio otorgado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) N° 489: “Prácticas de delimitación social de la clase media en la Argentina: una investigación etnográfica e histórica sobre moralidades, identidades etno-nacionales y apariencias espaciales y corporales” (2008-2010).
- 1 Entre los cuales incluía a profesionales y “semi-profesionales”, como técnicos y artistas, fuesen asalariados o no asalariados, además del personal directivo de la industria, el comercio y los servicios, y los empleados, vendedores y personal subalterno del comercio, la industria y los servicios (Germani, 1961).
 - 2 “Adiós al país de la clase media”, tituló el diario Página 12 una nota basada en un informe del 2004 de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). Allí sostenía que Uruguay con un 80% y Costa Rica con 71,6% eran ahora los países con más población de clase media, en tanto que Chile con 69,8%, Panamá con 68,6 y Brasil con 56,1% tenían una mayor proporción que la Argentina, que contaba con un 52,3%.
 - 3 Al respecto, véase una discusión sobre esta perspectiva en Visacovsky y Garguin (2009: 11-12).
 - 4 Por ejemplo, basándose en el nivel de ingresos, si el mismo cubre o no la *canasta básica* (la cual también resulta de una medición) y, en consecuencia, si pasan o no el umbral de la pobreza (Sosa-Escudero y Petralia, 2010). En Argentina, una dificultad adicional es la falta de confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuyos datos han sido cuestionados desde el 2007.
 - 5 Por supuesto, criterios diferentes llevan a delimitaciones diferentes, lo cual implica que si bajo ciertos métodos algunos individuos son clasificados por los expertos como “clase media”, de acuerdo a otros principios se convertirán, tal vez, en “pobres”. Ciertamente, segmentar a una población total de un distrito de acuerdo a sus niveles de ingreso (por caso) proporciona información significativa; la dificultad radica en poder inferir de estas operaciones metodológicas los comportamientos efectivos de las personas, así como supuestos modos necesarios de percibir la realidad.
 - 6 El sentido común sociológico predefine categorías clasificatorias construidas mediante indicadores ocupacionales, rentísticos, tributarios o educativos, homologando así una diversidad de experiencias, creencias y comportamientos individuales y colectivos; luego, tales experiencias, creencias y comportamientos son entendidos como derivaciones o precipitados de las categorías, cuyo carácter construido se transforma en objetivo.
 - 7 Siguiendo un modo de pensar etnometodológico, el esfuerzo por establecer “buenas delimitaciones” sociológicas frente a las supuestas demarcaciones confusas o incorrectas de los legos, no es otra cosa que prolongar desde la autoridad del experto los mismos métodos clasificatorios corrientes utilizados en la vida cotidiana. Expertos y legos tratan de corregir las delimitaciones confusas de los otros. Al igual que las controversias entre los expertos acerca de cómo deben establecerse los límites, en la vida cotidiana existe una pretensión por rectificar las delimitaciones en las que otros pretenden estar ubicados.
 - 8 No se trata de desestimar por completo la clasificaciones y delimitaciones expertas, pero es

imprescindible comprender que el diferenciar estratos sobre la base de un determinado nivel de ingresos no equivale a capturar la acción social, sino que constituye un modo de aprehender ciertos condicionantes que la hacen posible: no existe relación necesaria entre las mediciones sociológicas y los comportamientos reales, los cuales sólo pueden ser estudiados empíricamente y a través de las múltiples determinaciones contextuales. Por tal razón, no sólo se trata de entender cómo los conjuntos sociales devienen “clase media”, sino cómo existen modos diversos y contextuales de constitución de la misma, en relación con los condicionantes tradicionalmente llamado “objetivos”, y con las experiencias, modos de clasificación, narrativas y prácticas situadas (Bourdieu 2006; Furbank 2005; Lamont y Fournier, 1992).

⁹ Como la sociología de la “nueva pobreza”, también yo asocié a esta población con la “clase media”. Dichos estudios apelaron para la caracterización de la clase media tanto a procedimientos “objetivos” (tales como los niveles de ingreso) como intuitivos (es decir, dando por descontados ciertos atributos). También yo recurrí a información cuantitativa frecuentemente considerada “objetiva”, aunque en ningún momento derivé de ella la existencia de una clase media *real*. Por el contrario, el conocimiento de la información objetiva permite entender los condicionamientos o limitaciones de las acciones sociales; pero estas últimas no se derivan automáticamente del conocimiento de las primeras. Dicho en otros términos: el análisis de las reacciones y estrategias cotidianas o públicas en situaciones de crisis y descenso social, exige una perspectiva analítica en la que otras dimensiones de la vida social sean reconocidas. Uno de los primeros pasos consiste en estudiar los modos diversos de categorización por parte de los actores, incluso del mismo investigador quien, como en mi caso, se percibe a sí mismo como parte del mundo de la clase media. Pensar

analíticamente en las formas de establecer mi pertenencia a ese mundo resulta aleccionador: en efecto, acudimos continuamente a modos de reconocimiento (que son, a la vez, de diferenciación) sin necesidad de explicitarlos discursivamente: los estilos de hablar y vestir, las localizaciones residenciales, laborales, de esparcimiento y consumo; los bienes y servicios deseados y adquiridos; los gustos, entre muchos otros aspectos, se practican sin necesidad de justificativos. Debería llamar la atención que “clase media” no es una categoría que frecuentemente ni necesariamente invoquen los actores en la vida cotidiana. En realidad, muchas prácticas de delimitación o de percepción de fronteras sociales disímiles pueden estar asociadas a identidades de clase media; en consecuencia, la “clase media” se constituye como una categoría y un espacio completamente heterogéneo (Fernandes y Heller, 2006: 501; Visacovsky, 2008; Visacovsky y Garguin, 2009).

¹⁰ El conurbano bonaerense está integrado por 24 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires. (Nota del ed.)

¹¹ Entre 1980-1990 el PBI *per capita* se redujo en un 20 %, condición a partir de la cual la sociedad habría experimentado por vez primera la experiencia del descenso social colectivo; el ingreso medio de los hogares del Gran Buenos Aires cayó un 22%, y un 25% de la población más pobre sufrió la pérdida del 31% de sus ingresos. Los ingresos de los llamados “sectores medios” se redujeron entre un 27% y un 33%, lo que hizo que los “nuevos pobres” –inexistentes en 1974– se incrementaran al 4,2% de la población en 1980, y al 18,4 % en 1990 (Minujín, 1997).

¹² Estos estudios pueden ser vistos como parte de las tendencias internacionales de investigación en ciencias sociales que se han ocupado de las políticas económicas usualmente definidas como neoliberales, caracterizándolas como modos específicos de violencia desde el estado por parte de los grupos dominantes o hegemón-

nicos. La vinculación de las políticas económicas neoliberales con la violencia estatal constituye un tópico de abordaje frecuente internacionalmente (Friedman, 2003; Lutz y Nonini, 1999).

¹³ Otro conjunto de investigaciones (en muchos casos, encaradas por los mismos investigadores que abordaban el estudio de los “nuevos pobres”) se centró en la relación entre movilidad social ascendente, consumo y estilos de vida de clase media; más específicamente, en la emergencia y consolidación de una “fracción” de la clase media enriquecida, que incluía especialmente a profesionales independientes o empleados jerárquicos del sector de servicios en el ámbito privado, con muy altos ingresos, a los que veían como los beneficiados con las políticas económicas de la década de 1990. Desde aproximaciones predominantemente cualitativas, estos trabajos abordaron la aparición de nuevas formas de residencia y consumo, que expresaban a su vez la circulación de bienes y servicios globales que daban lugar a nuevas identidades y estilos de vida (Arizaga, 2000 y 2004; Svampa 2001; Svampa 2002; Wortman 2001 y 2003).

¹⁴ La intensa protesta social que irrumpió en diciembre del 2001 ocasionó la renuncia de todo el Poder Ejecutivo nacional encabezado por Fernando de la Rúa. El punto álgido de la crisis tuvo lugar el 20 de diciembre del 2001 en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde diferentes grupos de manifestantes fueron sangrientamente reprimidos por la policía, siendo asesinadas cinco personas, tras lo cual renunció ese mismo día todo el Poder Ejecutivo nacional. Aunque los “cacerolazos” se han convertido en un evento icónico de la crisis, la protesta social también incluyó saqueos a supermercados y almacenes de alimentos, principalmente por parte de sectores sumergidos en la miseria de la Provincia de Buenos Aires. Mucho se ha insistido sobre la manipulación que ciertos sectores del peronismo (liderados por quien sería

Presidente de la Nación a partir del 1 de enero del 2002, Eduardo Duhalde) habrían llevado a cabo, agitando a las poblaciones desesperadas de pobres. Aunque no es objeto de este artículo discutir este punto, la posible manipulación no contradice la existencia de una realidad indiscutible, como la de la pobreza y la exclusión social. Tras un breve período de desconcierto institucional, el 2 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa eligió al justicialista Eduardo Duhalde como nuevo presidente de la Nación. Su gobierno terminó con la *convertibilidad*, esto es, la paridad peso/dólar que había regido la economía argentina desde 1991 (impuesta por el gobierno del justicialista Carlos S. Menem como una estrategia para salir de la hiperinflación), lo que implicó la conversión en pesos de todos los depósitos bancarios en dólares y otras monedas en los valores vigentes en el mercado de cambios; esto, sumado a la continuidad de las restricciones para acceder al dinero depositado en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, generó consecuencias profundas en grandes sectores de la población, que vieron aterrados cómo gran parte de sus certidumbres respecto a qué debía ser un nivel y un estilo de vida apropiados, se desmoronaban. Para quienes tenían depósitos bancarios en monedas extranjeras, se establecieron distintos plazos de devolución, según los montos y la moneda en que fueron impuestos. En el caso de los depositantes en dólares, la mayoría aceptó la pesificación forzosa de los mismos (recibiendo a cambio, en muchos casos, bonos), mientras que otros optaron por la presentación de amparos judiciales, solicitando la devolución integral de sus depósitos en la moneda original, o al valor presente en el mercado de cambios.

¹⁵ Los fondos comunes de inversión se basan en la reunión de fondos de distintos inversores para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, con el propósito de reducir los niveles de riesgo; esta responsabilidad es delegada

a una sociedad administradora, tal como un banco u otro organismo financiero. Las participaciones pueden ser vendidas en el momento que se lo desee.

¹⁶ Entre ellos, estaban los bonos externos (cuyo origen había sido el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo en 1989); los bonos y letras del tesoro emitidos originalmente en dólares tras la devaluación en el 2002 (como Bontes y Letes), que fueron pesificados a \$ 1,40 por cada dólar, sin ninguna cláusula de ajuste, ni opción de convertirlos en un nuevo bono; y los bonos optativos del Estado Nacional (BODEN) emitidos a partir del 2003 en dólares (excepto en el 2007, que fue en pesos) con el fin de cancelar las deudas que el Estado nacional mantenía con sus empleados públicos, con los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

¹⁷ Entender las explicaciones de mis interlocutores podía tornarse, a veces, difícil, dado que se habían convertido en expertos dominadores del idioma financiero y, en muchos casos, judicial (como consecuencia de haber iniciado acciones legales). En el caso de las “inversiones conservadoras”, éstas se aplicaban tanto a la compra de títulos de deuda pública como a los depósitos bancarios como los plazos fijos, y eran las que mayoritariamente habían elegido mis interlocutores. Los expertos suelen decir que se trata de inversiones de más estabilidad, y que garantizan seguridad y retornos, aunque bajos. Como sabemos, no fue lo que sucedió. Estas inversiones se oponían a las “de alta rentabilidad”, entre las cuales están las acciones, fondos de cobertura, fondos de bienes raíces y otros fondos comunes de inversión. Estas inversiones tienen alta rentabilidad, aunque son más riesgosos, pero suelen no tener garantías. Entre mis interlocutores, pocos eran los que habían optado por este tipo de inversiones. El propio José Luis Machinea, ministro de Economía de dicho gobierno entre el 10 de diciembre de 1999 y el 5 de marzo de 2001,

alentaba en diversas notas periodísticas a invertir en bonos, que es lo que se hace en los países del primer mundo –afirmaba–.

¹⁸ Los barrios del norte y el noroeste del Gran Buenos Aires (denominación genérica que define utilizada la megaciudad conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de Buenos Aires, que no constituyen una unidad administrativa) se han convertido en el centro de la riqueza, con tiendas exclusivas y varias áreas residenciales como Recoleta, Palermo y Belgrano (en la ciudad de Buenos Aires), o Vicente López y San Isidro (fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires). Excepciones son Puerto Madero y algunas partes de Barracas (ambas al sur de la ciudad de Buenos Aires). En líneas generales, los menores indicadores socio-económicos están en los barrios del sur del Gran Buenos Aires.

¹⁹ Mientras escribo estas líneas, el gobierno encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha establecido a partir del 31 de octubre de 2011 nuevos controles para comprar dólares en Argentina. Cada operación deberá contar con el permiso de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta medida busca desalentar la compra de divisas por parte de particulares, especialmente de asalariados.

²⁰ Los estudios de Pierre Bourdieu han proporcionado una vía analítica para conectar una perspectiva no esencialista y productiva de las clases sociales con una teoría del consumo, que no lo reduzca o subordina a la producción. Bourdieu sostuvo que los esquemas de apreciación (sistemas clasificatorios) que hacen posible los actos de consumo están condicionados socialmente por la pertenencia a una clase social; en cada acto singular se ponen en juego distinciones sociales, que no son sino formas de demarcación jerarquizada de bienes simbólicos y materiales que, a su vez, reproducen el sistema de clases (Bourdieu, 2006).

- ²¹ En base a la Encuesta de Utilización y Gasto en Salud del Ministerio de Salud de la Nación del 2005, sabemos que aproximadamente el 39% de la población contaba con algún mecanismo de seguro social, ya sea obra social sindical, provincial o PAMI. A su vez, el 11.38% de los individuos contaba con una cobertura del sistema privado, mientras que el 6.61% presentaba un mecanismo de doble afiliación. Casi el 43% no contaba con seguros formales, por lo que su cobertura se realizaba mediante el sistema público, como centros de Atención Primaria y Hospitales (Maceira, 2008: 4). Para el año 2009, y según la Encuesta Permanente de Hogares, las obras sociales sindicales nacionales y provinciales contaban en el 2009 con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente. Para el mismo año, el PAMI brindó atención 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados. Por su parte, el subsistema privado propiamente dicho, que ofrecen las empresas de medicina prepaga, sanatorios, clínicas u hospitales de comunidades de modo directo, cubre a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto, que gastaron durante el mismo año \$12.807 millones. Unas 17 millones de personas (el 43% de la población), queda fuera de las coberturas mencionadas precedentemente, por lo que debe recurrir a la atención pública que ofrecen los hospitales estatales.
- ²² En el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue sancionada la ley 25994 de moratoria previsional y jubilación anticipada. El mismo año se dictó, además, el decreto 1454/05 del Poder Ejecutivo Nacional que modificó una ley del año 1995, para crear una moratoria permanente. Estas medidas le dieron la oportunidad de completar los años de aportes a quienes los tenían incompletos; pero, además, hizo posible que millones de personas que nunca habían aportado nada pudiesen jubilarse: según informó la Secretaría
- de Seguridad Social, hasta diciembre de 2007 esta serie de normas habilitaron 1.700.000 jubilaciones, otorgadas con planes de moratoria. Algunos críticos señalaron que estos beneficios otorgados a gente que no había realizado aportes se estaban financiando mediante el uso y reducción de los beneficios de quienes sí los hicieron.
- ²³ Como las clínicas y sanatorios no siempre pueden cumplir con toda la demanda, se generan reacciones airadas por parte de los clientes, quienes muchas veces creen que pueden obtener lo que la empresa les niega mediante pagos extras, si cuentan con el dinero.
- ²⁴ Este punto merece un tratamiento mucho más minucioso que el que puedo dedicarle aquí, pero resulta indispensable tener en cuenta que estas opciones dependen en gran medida de qué se quiere estudiar. Universidades públicas como la de Buenos Aires poseen un enorme prestigio en carreras como Medicina, Odontología, Ingeniería o Biología, y son pocas las universidades privadas que cuentan con estas carreras, o si las ofrecen, que posean prestigio. Distinto es el panorama en carreras como Marketing, Negocios, Administración de Empresas o Comercio Exterior, cuya oferta se ha expandido precisamente desde la década de 1990, y que son las preferidas de una buena parte de las universidades privadas que pretenden contar con una buena matrícula y rentabilidad. Pero al igual que en el caso de la elección de ciertas escuelas primarias o secundarias privadas, también la preferencia por ciertas universidades no públicas está íntimamente asociada a la afirmación de estilos de vida y al establecimiento de marcas de distinción social.
- ²⁵ En el caso de Buenos Aires y otras grandes ciudades de la Argentina, no constituye un asunto menor que la percepción naturalizada de la clase media sea en términos raciales, es decir, “blanca y europea”, excluyendo de la misma a “los negros”, o “cabecitas negras” (Guano,

2003: 162, 167; Tevik, 2007), razón por lo cual los desplazamientos espaciales apuntados pueden entenderse como formas efímeras de delimitación, en especial cuando las propias condiciones objetivas impiden un desplazamiento permanente a una *zona correcta*, esto es, mudarse a una nueva vivienda.